

**PROCEDIMIENTO DE  
RESPONSABILIDAD  
ADMINISTRATIVA: 50/2008.**

**SERVIDORA PÚBLICA:**  
\*\*\*\*\*

**México, Distrito Federal a nueve de marzo de  
dos mil nueve.**

Vistos para emitir resolución definitiva en el  
procedimiento de responsabilidad administrativa  
**50/2008**, y;

**R E S U L T A N D O:**

**PRIMERO. Denuncia de la probable conducta  
infractora por parte del Director de Registro  
Patrimonial.** Mediante oficio  
CSCJN/DGARARP/DRP/1665/2008 de catorce de  
julio de dos mil ocho, el Director de Registro  
Patrimonial hizo del conocimiento de la Directora  
General de de Responsabilidades Administrativas y  
de Registro Patrimonial de la Suprema Corte de  
Justicia de la Nación la probable infracción en que  
incurrió la servidora pública \*\*\*\*\*, a lo dispuesto  
en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica  
del Poder Judicial de la Federación, por  
incumplimiento de la obligación contenida en los  
artículos 8, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los numerales 50, fracción XXII y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005, al haber presentado extemporáneamente la declaración de modificación patrimonial, como Actuario, rango C, adscrita a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación.

**SEGUNDO. Inicio de procedimiento.** En acuerdo de uno de agosto de dos mil ocho, la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el oficio al que se hizo referencia en el considerando que antecede, así como las documentales que lo acompañaron; estimó que existían elementos suficientes para acreditar que \*\*\*\*\* se ubicó en el supuesto previsto en el artículo 131 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 8°, fracción XV, en relación con el diverso 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en el artículo 50, fracción XXII y 51, fracción III, del Acuerdo Plenario 9/2005, por ende, determino iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa a \*\*\*\*\* al que correspondió el número **P. R. A 50/2008** en ese mismo proveído le requirió para que en el plazo de cinco días hábiles rindiera el informe previsto en el

artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el diverso 38 del Acuerdo Plenario 9/2005 y ofreciera las pruebas que tuviera en su defensa, solicitándole que señalara domicilio dentro del Distrito Federal para oír y recibir notificaciones.

Asimismo, la Contraloría ordenó en atención a lo previsto en el artículo 17 del Acuerdo General Plenario 9/2005 notificar personalmente a \*\*\*\*\* en su domicilio particular y comunicarle su derecho a autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal.

**TERCERO. Solicitud de expediente.** Por proveído de dieciocho de agosto de dos mil ocho se ordenó girar oficio a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal Personal para que remitiera copia certificada del expediente personal de dicha servidora pública, que fue enviado mediante oficio SEA/DGRH/URL/29757/2008.

**CUARTO. Informe.** En auto de quince de agosto de dos mil ocho, la Contraloría tuvo por rendido en tiempo y forma el informe requerido a \*\*\*\*\* así como diversas pruebas documentales.

**QUINTO. Recepción del expediente personal.**

El veinticinco de agosto de dos mil ocho, el Secretario Ejecutivo de la Contraloría recibió copia certificada del expediente personal de \*\*\*\*\*.

**SEXTO. Cierre de instrucción.** Por proveído de veinte de octubre de dos mil ocho (foja ciento noventa y seis), al estar debidamente integrado el expediente, se declaró cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración del dictamen respectivo.

**SÉPTIMO. Dictamen de la Contraloría.** El diez de diciembre de dos mil ocho la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dictamen con los puntos resolutivos siguientes:

**“PRIMERO.** *\*\*\*\*\* es responsable de la infracción administrativa materia de este procedimiento, conforme a lo expuesto en el cuarto considerando de este dictamen.*

**“SEGUNDO.** *Se propone sancionar a \*\*\*\*\* con una amonestación privada, en los términos de lo argumentado en el quinto considerando.*

*Remítanse los autos del procedimiento de responsabilidades administrativas en que*

*se actúa a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en la parte final del último considerando.”*

Las consideraciones en que se sustenta dicha propuesta de resolución, en síntesis, son las siguientes:

- I. \*\*\*\*\* desempeñaba el cargo de Actuaría adscrita a la Comisión Substanciadora Única al momento de cometer la infracción que se le atribuye, tal como se desprende de las copias certificadas de sus nombramientos, que obran en su expediente personal de los que deriva el referido cargo.
- II. La infracción que se atribuye a \*\*\*\*\* consiste en haber omitido presentar oportunamente la declaración anual de modificación patrimonial, ejercicio dos mil siete, dentro del plazo que establece el artículo 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como Actuario, nombramiento respecto del cual los servidores públicos que lo desempeñen están obligados a presentar declaraciones de

situación patrimonial, de conformidad con lo previsto en los artículos 50, fracción XXII y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

**III.** Al rendir su informe \*\*\*\*\* expresó que al concluir su cargo como Actuario presentó su declaración patrimonial de conclusión - dieciséis de junio de dos mil ocho-, incluso manifiesta que su obligación legal únicamente era presentar su declaración de conclusión, por ende no estaría obligada a presentar la declaración de modificación patrimonial en el mes de mayo, en virtud de que su cargo como Actuario había concluido el quince de julio de dos mil ocho y a partir del dieciséis de abril de dos mil ocho fue nombrada como Secretaria adscrita a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, de las copias certificadas del expediente personal de \*\*\*\*\* se advierte que causó baja en el cargo de Actuaría el quince de abril de dos mil ocho; y que el dieciséis de julio de dos mil ocho presentó su declaración de conclusión en dicho cargo.

**IV.** El artículo 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005, establece como regla general, la obligación de todo servidor público de presentar declaración de modificación patrimonial durante el mes de mayo de cada año, señalando como excepción a dicha regla, que durante ese año ya hubiese presentado la declaración inicial o de conclusión del encargo, es decir, se debe presentar salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración de inicio o conclusión, dicha excepción sólo opera cuando la declaración de inicio o conclusión se presenta a más tardar el último día del mes de mayo en que fenece el plazo para cumplir con aquella obligación, es decir, en los meses de enero, febrero, marzo, abril o mayo, de lo contrario, ya no sería un hecho pasado a que se refiere la citada excepción.

En tales condiciones, es claro que \*\*\*\*\* no se ubicó dentro del supuesto de excepción, pues no presentó su declaración de conclusión durante el mes de mayo, sino hasta el dieciséis de julio y la de modificación patrimonial el diecinueve de junio de dos mil ocho.

**V. En tal virtud no** exime de responsabilidad a \*\*\*\*\* el hecho de que haya presentado su declaración de conclusión en el cargo de actuario pues tal circunstancia no lo releva de la obligación de presentar la declaración de modificación patrimonial, ya que en ésta el periodo que se declara es el correspondiente al año inmediato anterior, en el caso, el dos mil siete.

1. De la copia certificada en la que consta la declaración de modificación patrimonial relativa al ejercicio fiscal dos mil siete presentada por \*\*\*\*\* el dieciséis de junio de dos mil ocho, se advierte que la misma es extemporánea, esto es que fue presentada fuera del plazo que prevé la referida ley de responsabilidades para cumplir con dicha obligación, si se considera que debió haber hecho su declaración en el mes de mayo y no hasta el diecinueve de junio de dos mil ocho (foja diecinueve del expediente).

2. Por tanto, \*\*\*\*\* es responsable de la infracción administrativa que se le atribuye al no haber presentado con oportunidad su declaración anual de modificación patrimonial, ejercicio dos mil siete, como lo



ordena el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que la servidora pública presentó la declaración respectiva hasta el diecinueve junio de ese mismo año, esto es, fuera del plazo que prevé el artículo 37, fracción III, de la mencionada ley, de ahí que sea evidente que incurrió en la infracción a que alude el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir lo dispuesto en el primero de los preceptos citados de la ley de responsabilidades.

**VI Al haber encontrado responsable** administrativamente a \*\*\*\*\* de la falta atribuida, en el dictamen se propone sancionarla con una amonestación privada, toda vez que la conducta en que incurrió no está calificada como grave, además de que en términos generales se observó que era la primera vez que en el órgano interno de control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se instruía un procedimiento disciplinario en su contra; que dicha infracción no le generó beneficio o lucro, o provocó daño o perjuicio en el patrimonio de

este Alto Tribunal, al tratarse de la extemporaneidad o falta de oportunidad en la presentación de la declaración anual de modificación patrimonial, correspondiente al ejercicio dos mil siete.

**OCTAVO. Trámite del dictamen.** El referido dictamen junto con el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa **50/2008** se remitió mediante oficio CSCJN/DGRARP/DGARA/001061/2008 al suscrito a fin de que resuelva en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

### **C O N S I D E R A N D O:**

**PRIMERO. Competencia.** El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra de \*\*\*\*\*, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, fracción II, en relación con el 14, fracción XXI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de una servidora pública de

este Alto Tribunal a la que se le atribuye una conducta infractora que no está catalogada como grave.

**SEGUNDO. Marco normativo que regula el procedimiento.** Antes de abordar el estudio del referido dictamen y del procedimiento que le precedió, resulta conveniente precisar que tal como lo señala el artículo 4° del Acuerdo General de Administración 9/2005 para la substanciación y resolución de los procedimientos previstos en este Acuerdo serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que se oponga a lo dispuesto en esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudir a los principios generales de derecho, en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones aplicables.

**TERCERO. Formalidades esenciales del procedimiento.** Por principio, cabe señalar que del análisis del expediente relativo al **P.R.A. 50/2008**, se advierte que se siguieron las respectivas formalidades del procedimiento, en tanto que con motivo del seguimiento de la evolución de situación patrimonial de los servidores públicos: **1.** El Director de Registro

Patrimonial informó que \*\*\*\*\* presentó su declaración anual de modificación patrimonial, ejercicio dos mil siete, de forma extemporánea; es decir, denunció ante el órgano competente de la Contraloría la comisión de una falta administrativa con lo que se dio inicio al procedimiento. **2.** Mediante acuerdo de primero de agosto de dos mil ocho (foja catorce) la Contraloría determinó iniciar la investigación respectiva, y agotada ésta, determinó incoar este procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo cual otorgó un plazo de cinco días hábiles para que \*\*\*\*\* rindiera su informe respecto de los hechos que se le imputaron y ofreciera las pruebas relacionadas con su defensa. **3.** Dicho proveído se notificó personalmente a la servidora pública el siete de agosto de dos mil ocho. **4.** El cuatro de agosto de dos mil ocho \*\*\*\*\* rindió el informe solicitado y ofreció como pruebas diversas constancias. **5.** El Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el dictamen correspondiente y lo remitió a la Presidencia de este Alto Tribunal.

#### **CUARTO. Probables conductas infractoras.**

El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con la denuncia presentada por el Director de Registro Patrimonial en contra de \*\*\*\*\* y, una vez desarrollado dicho procedimiento,

la Contraloría de este Alto Tribunal estimó que dicha servidora pública es responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación contenida en el numeral 8, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los diversos 50, fracción XXII y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

**QUINTO. Marco normativo aplicable a las probables conductas infractoras.** Para estar en aptitud legal de resolver sobre si \*\*\*\*\* omitió cumplir alguna de sus obligaciones relacionadas con el registro de su evolución patrimonial, es imprescindible tener presente el contenido de los preceptos que se estimaron violados en la referida denuncia.

Así, conviene precisar que los artículos 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 8°, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como los diversos 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005, establecen:

***“ARTÍCULO 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:  
(...)”***

***XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional...”***

***“ARTÍCULO 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:  
(...)”***

***XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley...”***

***“ARTÍCULO 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:  
(...)”***

***III.- Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año....”***

***“ARTÍCULO 50. Tienen obligación de presentar ante la Suprema Corte declaración de situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, los siguientes servidores públicos:***

***(...)***

***XXII Actuario;...”***

***“ARTÍCULO 51. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:***

***(...)***

***III. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, acompañada de una copia de la constancia de ingresos del servidor público y, en su caso, de una copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta, si está obligado a presentar declaración en los términos de la legislación aplicable, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración de situación patrimonial a que se refieren las fracciones I y II de este artículo...”***

De lo dispuesto en los artículos que anteceden se desprende que los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan el nombramiento de Actuario, están obligados a presentar durante el mes de mayo de cada año, declaración de modificación patrimonial.

**SEXTO. Análisis de las conductas infractoras.** En el caso de \*\*\*\*\* se le atribuye como infracción el haber presentado extemporáneamente la declaración anual de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio dos mil siete, con motivo de su encargo como Actuario, por lo que es menester analizar las constancias de autos para determinar si su conducta se ajusta a la hipótesis de responsabilidad administrativa y si, derivado de ello, ha lugar a imponerle alguna sanción o en su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deba relevársele de la misma.

De las copias certificadas del nombramiento de \*\*\*\*\*, así como de la copia certificada del acuse de recibo de la presentación de su declaración de modificación patrimonial, documentos que corren agregados al presente expediente de responsabilidad administrativa, se advierte que el quince de mayo de dos mil siete el Presidente de la Suprema Corte de



Justicia expidió nombramiento a \*\*\*\*\* como Actuaría adscrita a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, con efectos a partir del primero de marzo de dos mil siete, y que el diecinueve de junio de dos mil ocho (p. 54) se recibió extemporáneamente su declaración de modificación patrimonial correspondiente al año de dos mil siete.

De los señalados elementos de convicción, los cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este procedimiento se arriba al convencimiento de que:

- \*\*\*\*\* se desempeña como Actuario, nombramiento respecto del cual los servidores públicos que lo ejercen se encuentran obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en términos de lo que prevén los numerales 50, fracción XXII y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.
- La declaración anual de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio dos mil siete, a que alude la fracción III del artículo 37 de la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas, debía presentarse a más tardar el último día del mes de mayo de dos mil ocho y dicha servidora pública la presentó hasta el dieciséis de junio del dos mil ocho.

- La declaración anual de modificación patrimonial correspondiente al año dos mil siete fue presentada extemporáneamente, por lo que \*\*\*\*\* se ubicó en la hipótesis de responsabilidad administrativa prevista en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al no haber cumplido con la obligación que le impone el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de presentar con oportunidad las declaraciones de situación patrimonial.

De esta suerte, se pone de manifiesto que dicha servidora pública al ejercer su encargo como Actuaría, se abstuvo de presentar dentro del plazo señalado por la ley, la declaración respectiva, por lo que al existir la obligación de presentar una declaración patrimonial de esa naturaleza para los servidores públicos de su categoría y funciones y no

haberlo hecho así, es evidente que incurrió en la falta administrativa que se le atribuyó.

En tal virtud, se considera que como lo concluyó la Contraloría de este Alto Tribunal en el dictamen emitido en este procedimiento de responsabilidad administrativa, \*\*\*\*\* se ubicó en la hipótesis de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precisamente por incumplir con la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial en tiempo, prevista en los diversos 8, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como con los diversos 50, fracción XXII y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

**SÉPTIMO. Responsabilidad.** Al existir la infracción administrativa que se atribuyó a \*\*\*\*\* es menester analizar si, dicha circunstancia trae aparejada la imposición de una sanción en su contra o si, por el contrario, existen causas que lo justifiquen y, por ende, debe relevársele de aquélla.

Lo anterior es así, porque sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que les asisten a los

servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para concluir si una falta administrativa debe ser sancionada es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 37, párrafos noveno y décimo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme al cual tratándose de la omisión en la presentación de la declaración patrimonial de inicio de encargo, es menester analizar si la falta respectiva encuentra alguna causa de justificación.

En los citados párrafos del numeral 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se dispone:

***“Artículo 37. (...) Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o comisión por un periodo de quince días naturales...”***

***En caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, la***

***Secretaría declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la fracción III...***

De lo dispuesto en este numeral, aun cuando el supuesto que prevé se refiere a la omisión de la presentación inicial y no a la anual de modificación patrimonial se estima que, si ante aquella omisión, la legislación prevé que es factible analizar la existencia de alguna causa justificada, por igualdad de razón, ante una presentación de la declaración anual fuera de plazo previsto para esos efectos, debe estudiarse la existencia o no de una causa de esa naturaleza.

En ese orden de ideas, atendiendo a la voluntad del legislador en cuanto a valorar la posible justificación de una falta administrativa relacionada con la presentación de una declaración patrimonial, debe evitarse actuar con un rigorismo a ultranza imponiendo fatalmente sanciones cuando se constate una extemporaneidad en el cumplimiento de una obligación de esa naturaleza, sin que previamente se analicen las características particulares que reviste el caso concreto, pues un prurito de esa índole

equivaldría a soslayar el incontrovertible hecho de que pudieran existir situaciones excepcionales que justifiquen plena o parcialmente la conducta respectiva.

Con base en lo anterior, se impone analizar lo que la servidora pública en mención manifestó al rendir el informe que le fuera solicitado con motivo del presente procedimiento de responsabilidad administrativa a saber:

**( ) ...I. “Como se desprende de los documentos remitidos por el Director de Registro Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades administrativas y de Registro patrimonial del Alto Tribunal, así como de los que a este escrito adjunto, quien esto suscribe ingrese a laborar al Poder Judicial de la Federación, en el cargo de analista SISE adscrita a la Comisión Substanciadora única, por lo que me fueron expedidos dos nombramientos, por el Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal:**

**a) El primero de ellos, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil siete, por el termino de tres meses, es decir, al treinta**

*y uno de mayo de ese mismo año (anexo 1); y,*

*b) El segundo, con efectos (la prórroga) a partir del uno de junio de ese mismo, también por el termino de tres meses, es decir al treinta de agosto (anexo 2); al que renuncie con efectos a partir del treinta y uno de julio de dos mil siete, para ocupar el diverso cargo en la misma Comisión Substanciadora.*

*Cabe precisar que durante mi encargo como analista jurídico, no me encontraba en ninguno de los supuestos de la ley de la materia que me obligaron a presentar declaración patrimonial.*

*II. El uno de agosto del año en cita inicie el cargo de actuario, con nombramiento expedido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el termino de tres meses en la plaza número 2697, adscrita a la propia comisión; con efectos a partir de esa misma fecha –uno de agosto de dos mil siete- al treinta y uno de octubre siguiente (anexo 3).*

*III. En mérito de lo anterior, y atendiendo a las disposiciones legales aplicables en virtud del inicio de mi encargo en el nuevo*

*puesto, presente mi declaración inicial el veintiocho de septiembre de dos mil siete dentro del termino que establece la fracción I del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; como se desprende del acuse de recibo respectivo que me fue otorgado (anexo 4).*

*IV. Posteriormente me fueron otorgados otros dos nombramientos expedidos por el Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mismo cargo de Actuaría:*

*a) Uno de ellos por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil siete al treinta y uno de enero de dos mil ocho, en la plaza y adscripción antes indicados (anexo 5); y,*

*b) El otro, nombramiento definitivo de esa misma plaza y adscripción, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil ocho (anexo 6).*

*V. Mediante oficio número  
SEC/DGRARP/01128/2008, del \*\*\*\*\*,  
Secretario Ejecutivo de la Contraloría,*



*recibí el formato de la “Declaración de Modificación Patrimonial, mayo 2008” en el que también me informaron que dicha declaración debía presentarla personalmente o por correo certificado durante el mes de mayo en la Dirección de Registro Patrimonial (anexo 7).*

*Cabe precisar que en la fecha en que me fue entregado el oficio de referencia (catorce de marzo del año en curso, según se desprende de las constancias remitidas por el Director de Registro Patrimonial) me encontraba laborando como servidor público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*

*VI. El ocho de abril de dos mil ocho, solicite licencia en la plaza de actuario número 2697, para ocupar diverso cargo en la propia Comisión Substanciadora a partir del dieciséis siguiente; la cual me fue autorizada por el periodo del dieciséis de abril al quince de julio de la presente anualidad (anexo 8) según se desprende del formato de solicitud-Actualización respectivo; misma que incluso fue prorrogada por el periodo del dieciséis de*

*julio al treinta y uno de octubre del año que transcurre (anexo 9).*

*VII. En virtud de la licencia concedida, inicié el encargo de Secretario de la Comisión, con nombramiento expedido por el Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, con efectos a partir del dieciséis de abril del año en curso por el termino de tres meses, es decir del quince de julio siguiente (anexo 10).*

*VIII. Con motivo del cambio de nombramiento, decidí consultar en la Dirección de Registro Patrimonial, si debía presentar o no la declaración de modificación patrimonial, ya que en el encargo de actuario en el que concluí el quince de julio de dos mil ocho ; fue expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el de Secretaria que inicie el siguiente (que es el que actualmente desempeño) fue otorgado por el Consejo de la Judicatura Federal; es decir por una dependencia diversa a la que desde el dieciséis de abril de la presente anualidad*

*presto mis servicios y, la ley de la materia es omisa al respecto.*

*IX. En mérito de lo anterior, el treinta de mayo de la presente anualidad, aproximadamente a las dieciséis horas, acudí a las instalaciones de la Dirección de Registro Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en el quinto piso del edificio alterno del Alto Tribunal ubicado en avenida 16 de Septiembre numero 38 de esta Ciudad de México, para solicitar información al respecto.*

*En dicha oficina fui atendida por una persona de nombre \*\*\*\*\*, de quien desconozco el cargo que ostente; le expuse mi situación y enseguida tomó mis datos en una libreta (anotó mi nombre completo, mi numero de expediente personal y el cuestionamiento relativo a que si estaba obligada a presentar la declaración de modificación patrimonial de mayo 2008 debido al cambio de nombramiento que tuve, el cual me fue*

*expedido por una dependencia diversa a la Suprema Corte), me dijo que ella se encargaría de atenderme, y así fue; se retiro de mi presencia y cuando regresó, después de consultarlo con su jefe (según su dicho), me comunicó que no era necesario presentarla.*

*X. El quince de julio el año que transcurre, acudí nuevamente a la Dirección de Registro Patrimonial para realizar una consulta respecto al llenado del formato de la Declaración de conclusión por el cargo de actuaria en la plaza antes referida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual presenté el dieciséis siguiente (anexo 11), dentro del termino establecido para ello, por la fracción II de artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.*

*En esa segunda ocasión (quince de junio pasado), el licenciado \*\*\*\*\*, adscrito a la Dirección aludida, me informó que estaba omisa respecto de mi declaración de Modificación patrimonial, indicando que debí haberla presentado en mayo de*

*este año; a lo que incluso replique que no podía estar omisa porque en mayo ya no estaba adscrita a la Suprema Corte, sino que me encontraba laborando como servidor público del consejo de la Judicatura Federal, además de que personal de esa misma oficina me había comunicado que no tenía que presentarla.*

*XI. No obstante lo anterior, decidí presentar la declaración de modificación patrimonial la cual entregue ante la misma dirección de registro patrimonial, junto con un escrito en el que explicaba los motivos por los que lo hacía en forma extemporánea (anexo 12).*

*Tal como lo precisé en dicho ocurso, en ningún momento tuve la intención de eludir la responsabilidad administrativa en la que pudiera incurrir con motivo de la presentación extemporánea de mi declaración de modificación patrimonial; sino que considere indispensable manifestar esa situación, de manera voluntaria, para acreditar la existencia de la “causa justificada” a que se refiere el propio numeral 37 de la Ley Federal de*

***Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.***

***En efecto, mis declaración inicial y de conclusión las presente oportunamente, el veintiséis de septiembre de dos mil siete y dieciséis de junio de dos mil ocho, respectivamente lo que puede comprobarse con los respectivos acuses de recibo (anexo 4 y 11 antes citados); esto significa que cumplí con mis obligaciones como servidor público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los términos establecidos por la propia ley de la materia y el propio acuerdo 9/2005 del pleno de este Alto Tribunal , por lo que, desde este momento solicito que al resolver el presente asunto, se tome en cuenta esa circunstancia.***

***Ahora bien, el escrito al que me refiero en el punto identificado con el número X. En el que expuse los motivos por los que presentaba mi declaración en forma extemporánea (anexo 12 antes mencionado), no fue remitido por la dirección de Registro Patrimonial a esa Secretaria ejecutiva, a pesar de haber sido***

*entregado el mismo día en que presente dicha declaración de modificación (como se puede advertir del sello impreso en la parte inferior izquierda); por lo que, también solicito desde este momento se requiera al Director de Registro Patrimonial para que lo remita, asimismo informe cuál fue el trámite que le dio a dicho ocuso, e indique la razón por la cual omitió su envío junto con los demás documentos con los que se dio cuenta en el auto inicial del procedimiento de responsabilidades administrativa en que se actúa; para tal efecto adjunto al presente, el original del acuse de recibo respectivo (el cual fue enumerado previamente, como anexo 12).*

*Lo anterior, a efecto de reforzar mi argumento en el sentido de que, la omisión de entregar dicha declaración durante el mes de mayo de 2008, en ningún momento fue con la finalidad de eludir mis obligaciones como servidor público, sino que, ello se debió a la falta de información apropiada; la cual derivo de los cambios de nombramiento que tuve de Actuaría a secretaria, ambos con*

*adscripción a la Comisión Substanciadora única del Poder Judicial de la Federación, los cuales fueron expedidos por dependencias diversas; el primero por la Suprema Corte y el segundo por el Consejo de la Judicatura Federal.*

*No obstante lo anterior, estimo relevante destacar que, si bien es cierto que no presente la declaración de modificación patrimonial durante el mes de mayo de dos mil ocho, también lo es que, a la fecha de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que se me instruye, no estaba omisa de su presentación (como incluso se aseveró en el primer párrafo del auto inicial del procedimiento en que se actúa) sino que dicha declaración la presente en forma extemporánea el diecinueve de junio del citado año (anexo 13); por lo que no se debe de perder de vista que la conducta que se me imputa no esta calificada como grave: además de que en mi desempeño como servidor público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se instruyó ningún procedimiento disciplinario en mi contra y, en todo caso,*



***dicha infracción no me generó beneficio o lucro, ni provocó con ello, daño perjuicio al patrimonio de este Alto Tribunal, al tratarse de la falta de oportunidad en la presentación de la declaración de modificación patrimonial.***

***Asimismo cabe precisar que desde el dieciséis de abril de este mismo año deje de prestar mis servicios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la que presente mi declaración de conclusión como actuario dentro de los sesenta días naturales siguientes al de mi conclusión en dicho cargo, es decir al haber concluido mi labor en el alto Tribunal, mi obligación legal era la de presentar precisamente la declaración de conclusión, que en todo caso significaría que ya no estaba obligada a presentar la de modificación de mayo, pues como ya lo dije en ese mes ya había concluido mi encargo de Actuaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues estaba desempeñando el cargo de secretaria con nombramiento expedido por el Consejo de la Judicatura Federal desde el dieciséis de abril del presente año.***

***Finalmente para acreditar lo sustentado en el presente informe ofrezco las siguientes:***

### **PRUEBAS**

#### ***I. DOCUMENTALES, consistentes en copias certificadas de :***

- a) Dos nombramientos como analista jurídico SISE, expedido por el Consejo de la Judicatura Federal; uno de ellos con efectos a partir del uno de marzo de dos mil siete y el otro, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil siete y el otro con efectos a partir de uno de junio de ese mismo año, ambos por el termino de tres meses (anexo 1 y 2).***
- b) Tres nombramientos como actuaria, expedidos por la Suprema Corte de Justicia de la Federación, uno de ellos con efectos a partir del uno de agosto de dos mil siete, el otro con efectos a partir del uno de noviembre de ese mismo año ambos por el termino de tres meses, y el restante, nombramiento definitivo, con efectos a partir del uno de febrero del año en curso. (anexos 3, 5 y 6).***

**c) Tres acuses de recibo relativos a la presentación de las declaraciones de inicio, de conclusión y de modificación patrimonial (anexos 4, 11 y 13).**

**d) Oficio número  
SEC7DGRARP7DRP70112872008 del  
licenciado \*\*\*\*\*, Secretario Ejecutivo  
de la Contraloría (anexo 7).**

**e) “Formato de solicitud-autorización” de licencia en el cargo de actuario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales me fueron autorizadas por los periodo del dieciséis de abril al quince de julio de la presente anualidad y del dieciséis de julio al treinta y uno de octubre del año que transcurre (anexos 8 y 9).**

**f) Nombramiento de secretaria de la comisión expedido por el consejo de la Judicatura Federal; con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil ocho, por el término de tres meses (anexo 10).**

**II. DOCUMENTAL, consistente en el original del acuse de recibo de mi escrito de diecinueve de junio del año en curso, presentado ese mismo día en la Dirección**

***General de Registro Patrimonial (anexo 12).***

***III. DOCUMENTAL, consistente en el informe que sirva rendir el Director de Registro Patrimonial en el que indique si recibió en la Dirección a su cargo el escrito de diecinueve de junio del año en curso, signado por la suscrita, asimismo, indique cuál fue el trámite que le dio a dicho ocuro y la razón por la que omitió su envío junto con los demás documentos con los que dio cuenta en el auto inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa 50/2008 en que se actúa.***

Lo argumentado por \*\*\*\*\* no es suficiente para relevarla de la responsabilidad en que incurrió, pues el hecho de que haya presentado oportunamente su declaración de conclusión patrimonial, como quedó demostrado con la copia simple del acuse respectivo que obra a fojas 23 del expediente, a la que se le otorga pleno valor probatorio en virtud de que la Contraloría de este Alto Tribunal reconoció su autenticidad y le otorgó ese valor probatorio, no deja a salvo su obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial durante el mes de mayo.

En efecto, si bien es cierto que en el artículo 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005, transcrito en párrafos anteriores, se precisa que la declaración de modificación patrimonial debe presentarse **durante el mes de mayo de cada año** y se establece como **salvedad** a dicha obligación el hecho de que **en el mismo año** se hubiesen presentado la de inicio o la de conclusión de encargo; también lo es que una correcta interpretación de dicho precepto lleva a concluir que sólo está relevado de la obligación de presentar declaración de modificación patrimonial en mayo quien, a más tardar el último día de ese mes ha presentado declaración patrimonial de inicio o de conclusión de encargo, pues la anualidad a la que se refiere la salvedad en comento debe computarse de mayo de un año a mayo del año siguiente.

Ahora bien, en el presente caso no se está ante la salvedad descrita ya que la declaración de conclusión se presentó hasta el dieciséis de junio de dos mil ocho, es decir dieciséis días posteriores de que concluyó el plazo para la presentación de la declaración anual de modificación patrimonial.

En abono a lo anterior, debe destacarse que la servidora pública sujeta al procedimiento parte de una premisa equivocada al considerar que su relación

laboral con este Alto Tribunal concluyó el quince de abril de dos mil ocho, con motivo de que le fue otorgado nombramiento de Secretario para laborar en la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, el hecho de que se le hubieren otorgado sendas licencias del dieciséis de abril al quince de octubre de 2008, a **\*\*\*\*\***, revela que la respectiva relación laboral concluyó hasta la última fecha antes indicada.

Incluso, conforme a lo precisado en la fracción III del artículo 54 del Acuerdo General Plenario IX/2005 del veintiocho de marzo de dos mil cinco<sup>1</sup>, debe reconocerse que en todo caso la obligación de rendir declaración patrimonial de conclusión surgió al mundo jurídico hasta el dieciséis de julio de 2008, fecha en que se cumplieron los tres meses a que se refiere la citada fracción.

---

<sup>1</sup> ***“Artículo 54. Los servidores públicos que ocupen cargos de los mencionados en el artículo 50 de este Acuerdo, no estarán obligados a presentar declaración patrimonial inicial o de conclusión cuando:***

***... ( )***

***III. Les sea concedida licencia que no exceda de tres meses y no tenga como finalidad desempeñar otro cargo;***

***... ( )”***

En ese orden de ideas se concluye que las defensas enderezadas por \*\*\*\*\* no constituyen elementos suficientes para relevarla de la responsabilidad administrativa por la falta en que incurrió al no haberse ajustado al marco legal que la obligaba a rendir su declaración de modificación patrimonial en mayo de dos mil ocho, toda vez que las mismas no revelan alguna causa justificada que la haya imposibilitado para cumplir con aquélla, máxime que a ésta le correspondía analizar el marco jurídico aplicable, cuyo desconocimiento no permite eximirla de su comportamiento, más aún al tratarse de una licenciada en derecho, como consta en la foja ciento treinta y seis del expediente en que se actúa.

Por ende, su obligación de rendir declaración patrimonial de conclusión surgió hasta dieciséis de julio de dos mil ocho, por lo que no existe justificación alguna para concluir que no debía presentar la declaración de modificación anual en mayo de 2008.

Por tanto, debe declararse fundada la denuncia que dio lugar al procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en contra de \*\*\*\*\*.

**OCTAVO. Individualización de la sanción.** En virtud de que se acreditó que \*\*\*\*\* se ubicó en la

hipótesis de responsabilidad administrativa, debe determinarse la sanción que se le ha de imponer atendiendo a la legislación actual, por ser ésta la vigente en la época en que ocurrieron los hechos.

En primer lugar, es conveniente recordar lo que se ordena en el artículo 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

***“ARTÍCULO 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:***

***(...)***

***III. Declaración de modificación patrimonial durante el mes de mayo de cada año.***

***(...)”***

Asimismo, lo que se establece en los párrafos noveno y décimo del mismo numeral:

***“Artículo 37. (...) Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se***



***suspenderá al infractor de su empleo, cargo o comisión por un periodo de quince días naturales.***

***En caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, la Secretaría declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la fracción III...”***

De lo transcrito se desprende que el legislador estableció un sistema lógico y progresivo conforme al cual los servidores públicos incurrirán en una responsabilidad a la que resulta aplicable una diversa sanción tomando en cuenta el grado de contumacia que se advierta del cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de modificación patrimonial.

En efecto, como se colige de lo señalado en el párrafo décimo antes transcrito, tratándose de la omisión en la presentación de la referida declaración, si ésta se da en un primer momento, el servidor

público se hará acreedor a una suspensión por un periodo de quince días, en cambio, de continuar por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido, se declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos.

En el presente caso, ha quedado demostrado que \*\*\*\*\* omitió presentar su declaración de modificación patrimonial; sin embargo, no se debe soslayar que presentó oportunamente su declaración de conclusión de encargo y que lo hizo trece días después de que concluyó el plazo para presentar la de modificación patrimonial. Estas peculiaridades deben tomarse en cuenta tal como se señala en el artículo 47 del Acuerdo General Plenario 9/2005, conforme al cual no revela el mismo grado de gravedad el hecho de que una vez iniciado el procedimiento por falta de declaración de situación patrimonial, se advierta que ésta se presentó de manera extemporánea, antes de iniciado dicho procedimiento o después del mismo, o no se haya subsanado la omisión.

Es conveniente traer a colación lo que se ordena en dicho numeral:

***“Artículo 47. Para la individualización de las sanciones establecidas en el artículo 37 de la Ley, deberá tomarse en cuenta que revela diverso grado de gravedad el hecho de que ya iniciado el procedimiento por falta de la declaración de situación patrimonial, se advierta que ésta se presentó de manera extemporánea, antes de iniciado dicho procedimiento o después del mismo, o no se haya subsanado la omisión.”***

En este orden de ideas, es preciso atender a los fines de la regulación en materia de responsabilidad administrativa y, específicamente, a los que se persiguen con el control de la situación patrimonial de los servidores públicos, para ello es necesario tener en cuenta que la regla de individualización prevista en el párrafo noveno del artículo 37 de la citada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es aplicable únicamente cuando el servidor público respectivo ha omitido de forma total presentar su declaración de modificación patrimonial **con la finalidad de impedir la fiscalización de su situación patrimonial**, lo que no acontece cuando presenta de manera oportuna y sólo trece días después de concluido el plazo para la presentación de la declaración anual de modificación patrimonial, la diversa de conclusión de encargo, en la

que revela su situación patrimonial, pues ello es revelador de que su intención no es la de impedir la fiscalización de su situación patrimonial, ya que la Contraloría podrá ejercer tales facultades a partir de la declaración presentada y, en caso de que advierta cualquier signo de enriquecimiento ilícito, podrá actuar en consecuencia.

En ese tenor, para fijar la sanción correspondiente es necesario atender al criterio general de individualización de la sanción previsto en los artículos 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la fracción I del artículo 45 del citado Acuerdo 9/2005.

El artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala:

***“Artículo 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos en los tres últimos párrafos del artículo 53 y los artículos 54 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.***

***En todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones XI a XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las fracciones I a VI del artículo 131 de esta ley, y las señaladas en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***(...).***”

El artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la letra dice:

***“Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:***

***I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella;***

***II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;***

***III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor; entre ellos la antigüedad en el servicio;***

***IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;***

***V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y***

***VI. El monto del beneficio, lucro, o daño derivado del incumplimiento de obligaciones.***

***Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.”***

El artículo 45, fracción I, del Acuerdo 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es del tenor siguiente:

***“Artículo 45. Las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan las obligaciones previstas en el artículo 2º. de este acuerdo, consistirán en:***

***I. Apercibimiento privado o público;***

***II. Amonestación privada o pública;***

***III. Sanción económica;***

***IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año;***

***V. Destitución del puesto;***

***VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y,***

***VII. Pérdida del respectivo cargo, de las prestaciones y beneficios en términos del***

***párrafo último del artículo 101 constitucional.”***

En ese contexto, a continuación se lleva a cabo la individualización de la sanción correspondiente, con base en las fracciones I a VI del transcrito artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

I. Por lo que hace al primero de los aspectos referidos, es pertinente destacar que la falta cometida por \*\*\*\*\* prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento a la obligación señalada en el artículo 8, fracción XV, en relación con lo dispuesto en el artículo 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los numerales 50, fracción XXII y 51, fracción III, del Acuerdo General de Administración 9/2005, no está considerada como grave, de acuerdo con lo que se establece en la fracción I del artículo 45 del Acuerdo Plenario 9/2005 en mención, así como en el diverso numeral 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además de que la falta administrativa respectiva no se encuentra comprendida en el catálogo de las faltas graves, debe precisarse que por sí misma tampoco resulta de



gravedad, toda vez que se advierte que la intención de \*\*\*\*\* no fue la de impedir la fiscalización de su situación patrimonial, pues la dio a conocer a través de la diversa declaración de conclusión de encargo que presentó trece días después de concluido el plazo para la presentación de la declaración anual de modificación patrimonial; sin embargo, debe sancionarse con el fin de evitar prácticas de esa naturaleza.

II. Por lo que atañe a las circunstancias socioeconómicas de \*\*\*\*\*, no es necesario precisarlas en virtud de que en el caso no se impondrán sanciones pecuniarias, ni tampoco son relevantes para pronunciarse sobre la gravedad de la falta cometida.

III. En lo atinente al tercer elemento, es menester precisar que \*\*\*\*\* tenía el puesto de Actuario adscrita a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, y que de su expediente personal que se lleva en la Dirección General de Personal se advierte que ingresó a laborar a la Suprema Corte con el cargo de Analista Jurídico SISE a partir del primero de marzo de dos mil siete (foja 53 del expediente).

En relación con los antecedentes del infractor, también se debe tener en cuenta cuál ha sido la conducta procesal observada por la servidora pública durante el desarrollo de este procedimiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

***“CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES.***

*La conducta procesal de las partes es un dato objetivo de convicción para el juzgador, que debe tomarse en cuenta, sin que por ello se violen las garantías individuales.”*

(Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 111. Página: 88).

Del análisis de las constancias de autos se desprende que a \*\*\*\*\* se le notificó el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra; rindió el informe correspondiente, haciendo valer las defensas que estimó pertinentes y, además, ofreció las pruebas que estimó conducentes para su defensa. Lo anterior muestra su interés en el desarrollo del procedimiento e, incluso, en la resolución que en éste pueda llegar a emitirse.

**IV.** Por lo que se refiere al cuarto aspecto, relativo a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, debe atenderse al bien jurídico salvaguardado, así como a las repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza y la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes y, por otra parte, a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta, así como los medios empleados para ejecutarla.

De tal suerte, debe precisarse que el bien jurídico que tutela la obligación de presentar declaraciones anuales de situación patrimonial, primordialmente se refiere a la honradez que debe caracterizar a todo servidor público, quien no debe mostrar signo alguno de enriquecimiento obtenido en el desempeño de sus funciones que se aparte de los emolumentos devengados por la prestación de sus servicios y su lesión o amenaza reviste gran trascendencia para la vida social, pues generan desconfianza en las instituciones de servicio público.

En la especie, \*\*\*\*\* omitió presentar oportunamente su declaración de modificación patrimonial correspondiente a dos mil siete, por lo que no se ciñó al marco legal aplicable, siendo relevante reprochar las conductas que impliquen el

incumplimiento de las obligaciones consistentes en presentar declaraciones patrimoniales.

Asimismo, en cuanto a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta, así como a los medios empleados para ejecutarla, debe precisarse que de autos se advierte que la mencionada \*\*\*\*\* presentó su declaración de modificación patrimonial correspondiente a dos mil siete y que, incluso, en el informe que rindió con motivo de este procedimiento, reconoce haberlo hecho; sin embargo, quedó acreditado que presentó la diversa de conclusión de encargo trece días después de concluido el plazo para la presentación de la declaración anual, aspecto que se estima debe considerarse para imponer la sanción correspondiente, ya que, como se ha venido señalando, el hecho de que haya presentado su declaración de conclusión es revelador de que su intención no fue la de impedir el ejercicio de las facultades de fiscalización de la Contraloría de este Alto Tribunal, las que pueden ser ejercidas a partir de la información proporcionada en la declaración presentada.

V. En lo concerniente al quinto punto, se pone de relieve que del expediente personal de \*\*\*\*\* se advierte que no ha sido sancionada con motivo de

alguna falta administrativa, de ahí que no se actualice el supuesto de reincidencia.

**VI.** Finalmente, por lo que hace al punto sexto de la disposición en comento, es preciso puntualizar que no existen pruebas en el sentido de que \*\*\*\*\* hubiera obtenido un beneficio económico indebido de este Alto Tribunal como consecuencia de su conducta infractora.

De tal suerte, para la imposición de la sanción respectiva, habrá de tomarse en cuenta que la falta en que incurrió \*\*\*\*\* no está catalogada como grave; que presentó su declaración de conclusión de encargo el dieciséis de junio de dos mil ocho y la de modificación patrimonial al diecinueve de junio de dos mil ocho; que no hay constancia de que hubiera sido sancionada con motivo de la comisión de alguna infracción administrativa; y que con motivo de tal infracción administrativa no obtuvo beneficio o lucro, ni provocó daño o perjuicio a este Alto Tribunal.

En mérito de lo expuesto, en uso de las facultades que me confieren los artículos 14, fracción XXI, y 133, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y tomando en consideración los elementos a que hace referencia el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, se llega a la conclusión de que ha lugar a imponer como sanción a \*\*\*\*\* la consistente en **amonestación privada**, la que habrá de ejecutarse por conducto de la Contraloría de este Alto Tribunal, previa cita a la servidora pública respectiva en la sede de aquélla.

Asimismo, deberá remitirse copia del presente fallo a la Dirección General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente personal de \*\*\*\*\*; así como a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que la integre en el registro de servidores públicos sancionados.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

**PRIMERO.** Conforme a lo expuesto en el considerando octavo de la presente resolución, \*\*\*\*\* incurrió en la falta administrativa materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa.

**SEGUNDO.** Se sanciona a \*\*\*\*\* con una amonestación privada que habrá de ejecutarse en los términos expresados en el último considerando de este fallo.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal, a efecto de que notifique esta determinación a la servidora pública sujeta al procedimiento y, en su oportunidad, lo archive como totalmente concluido.

Así lo resolvió el señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el licenciado Luis Grijalva Torrero, Secretario Ejecutivo de la Contraloría de este Alto Tribunal.